

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021)

SENTENCIA

Magistrada Ponente: María Eugenia Gómez Velásquez

Proceso : Ordinario de Segunda Instancia
Demandante : **MARÍA JANETH JIMÉMEZ CALVO**
Demandado : **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. -COOMEVA E.P.S. S.A.-**
Radicado : **05001-31-05-008-2015-00618-01**
Providencia : Sentencia
Temas y Subtemas : Seguridad Social -Reembolso gastos médicos, prescripción-
Decisión : Confirma decisión condenatoria
Sentencia N° : 085

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRERZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, profieren la siguiente decisión de fondo, previa deliberación, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 806 del 4 de junio de 2020, *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se solicita **condenar a Coomeva E.P.S. S.A. al pago de la suma de \$20.560.372,00, por reembolso de los gastos médicos sufragados** como consecuencia de los procedimientos prioritarios, urgentes y diagnóstico oportuno, que debió realizarse al señor Alberto Molina Valencia, cónyuge de la demandante, en su calidad de cotizante y quien falleció el 21 de septiembre de 2012; **indexación de las condenas y Costas del proceso.**

Hechos relevantes de la demanda:

Afirma el apoderado de la parte actora, que Alberto Molina Valencia - el médico internista- se encontraba afiliado a Coomeva E.P.S. S.A. en calidad de cotizante; padecía desde hacía varios años un tumor maligno (liposarcoma mediastinal recidivante), siendo tratado con quimioterapias y practicándosele tres cirugías, pero por la localización del tumor y los antecedentes de las cirugías, como única alternativa para salvar su vida, requirió con urgencia la realización de una radiocirugía robótica Cyberknife, para así descomprimir los órganos vitales que estaban comprimidos por la masa tumoral; radicando el 11 de julio de 2012 en la entidad demandada la solicitud de autorización, dándose como fecha para reclamar la misma el 24 del mismo mes y año, sin obtener respuesta, por lo que el 27 de julio presentó Acción de Tutela, conocida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de garantía de Medellín; ante las demoras y negligencias de Coomeva, la urgencia de las cirugías, el 11 de septiembre de 2012 acudieron al Instituto Neurológico de Colombia -INDEC-, cancelando la suma de \$38.857.000,00, realizándose la primera cirugía el 19 de septiembre de la citada anualidad; fecha en que se profirió Fallo de Tutela, protegiéndose los derechos fundamentales invocados; ordenándose a la demandada autorizar la cirugía robótica con

Cyberknife cinco sesiones o más y tratamiento integral; la decisión anterior fue impugnada por la accionada, siendo confirmada por el Juzgado 22 Penal del Circuito y ante el incumplimiento se presentó incidente de desacato y que ante la agresividad de la enfermedad, el señor Alberto Molina Valencia falleció el 21 de septiembre de 2012 y por tanto sólo se le pudo realizar una sola sesión del procedimiento, por lo que el INDEC hizo la devolución del dinero restante, esto es, \$19.394.560,00; que la demandante radicó ante Coomeva E.P.S. S.A. solicitud de reembolso por los valores efectivamente pagados por los procedimientos realizados, sin que haya efectuado devolución alguna.

Respuesta a la demanda:

Efectuadas las diligencias de notificación y traslado de la demanda, **Coomeva E.P.S. S.A. a través de apoderado judicial dio respuesta¹**, aceptando los hechos relativos a la Acción Tutela formulada por el señor Alberto Molina Valencia; su fallecimiento y el valor del pago efectuado por la demandante; respecto a los demás hechos indica que no le constan, solicitando la prueba de los mismos. Asegura que en ningún caso ha existido negligencia de Coomeva E.P.S. S.A. y que la petición presentada por la demandante no cumple con los requisitos de la solicitud de reembolsos consagrada en el artículo 14 de la Resolución 5261 de 1994, toda vez que fue presentada de manera extemporánea. Se opuso a las pretensiones de la demanda y para su defensa formuló las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación a cargo de Coomeva E.P.S.; prescripción; cobro de lo no debido; buena fe; temeridad y mala fe.

Decisión de Primera Instancia:

Mediante Sentencia, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín **condenó a Coomeva E.P.S. S.A. a reconocer y pagar la suma de**

¹ Folios 93 a 106.

\$20.560.372,00, como reembolso de gastos médicos sufragados, como consecuencia de los procedimientos médicos prioritarios, urgentes realizados al señor Alberto Molina Valencia, los cuales quedan en favor de la sucesión del mismo; condenó a la indexación de las condenas a partir del 16 de diciembre de 2012 y hasta el pago efectivo de lo adeudado. Declaró implícitamente resueltas las excepciones formuladas. Condenó en Costas a cargo de Coomeva E.P.S. S.A., fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.111.312,00 a favor de la parte demandante.

Recurso de Apelación:

Inconforme con la decisión anterior, la apoderada de Coomeva E.P.S S.A., formuló recurso de apelación, indicando que lo fundamenta en lo indicado en el artículo 14 de la Resolución 5261 de 1994, ya que si bien se aduce que al usuario se le ordenó la práctica de la cirugía de manera prioritaria ello no traduce una urgencia y cuando se habla de prioritario, se puede tener un tiempo estimado entre la orden y la materialización del servicio, mientras que lo urgente no da ninguna espera; sin evidenciarse una negligencia de su mandante, por cuanto realizó un “ordenamiento” al Instituto Neurológico de Colombia en razón a lo decidido en el Fallo de Tutela, por lo que no debió de hacer el cobro particular sino refacturar a Coomeva E.P.S., quedando por tanto demostrado que tuvo la intención de cumplir lo ordenado por el médico tratante al usuario fallecido.

Sostiene que el término de 15 días consagrado en la Resolución 5261 de 1994 es imperativo y por tanto de obligatorio cumplimiento, no un mero formalismo; que la excepción de prescripción se formuló porque no se interrumpió la misma, al no haber sido notificada la demanda dentro del año siguiente a la notificación de la providencia que la admite, conforme el artículo 94 del Código General del Proceso; ya que los hechos ocurrieron en septiembre del año 2012, admitiéndose la demanda en mayo de 2015 y efectuándose la notificación el 11 de noviembre del año 2016; sin que se interrumpiera el término prescriptivo, ya que se

requería que la notificación de la demanda se efectuara dentro del año siguiente a la notificación de esa providencia; transcurriendo un término de 4 años y dos meses entre la fecha de los hechos y la notificación de la demanda, superándose el plazo prescriptivo de tres (3) años consagrado en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conforme a lo anterior, solicita se revoque en su integridad la Sentencia de Primera Instancia.

Alegatos de Conclusión:

La apoderada de Coomeva E.P.S. S.A. reiteró los argumentos esgrimidos al sustentar el recurso de apelación, aseverando que se encuentra prescrita la acción, ya que el reembolso pretendido se causó en el año 2012 y han transcurrido más de cuatro (4) años, con lo que se supera el término de tres (3) años previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; que además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la intervención quirúrgica practicada al señor Alberto Molina, no se presentó derivada de una urgencia, pues de haber sido este el caso, debió haber sido hospitalizado de inmediato para realizarle el procedimiento requerido sin necesitar para ello, el ordenamiento y/o autorización de la EPS, sin que por tanto se cumpla lo consagrado en el artículo 9° de la Resolución 5261 de 1994, que establece que urgencia es la situación que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, sin que por tanto proceda el reembolso pretendido y por tanto solicita se revoque en su totalidad la sentencia de Primera Instancia y se absuelva a Coomeva E.P.S. S.A.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 y los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Conflicto Jurídico:

El conflicto jurídico a dirimir, radica en analizar si hay lugar a revocar la decisión de Primera Instancia, en cuanto condenó al reembolso de los gastos médicos sufragados con ocasión de los procedimientos médicos realizados al afiliado, Alberto Molina Valencia; analizándose previamente si como lo aduce la parte demandada, se produjo la caducidad de la acción, al no haberse interrumpido la prescripción con la presentación de la demanda, por no notificarse dentro del año siguiente a su admisión.

Encontrando esta Colegiatura procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

1º Caducidad de la acción:

Aduce la apoderada de Coomeva E.P.S. S.A. que no se interrumpió la prescripción, al no haberse notificado el Auto de la demanda, dentro del año siguiente; **encontrando esta Sala de Decisión que no son de recibo a sus argumentos**, como se explica a continuación.

En el régimen laboral el fenómeno jurídico de la prescripción, se encuentra regulado en el artículo 151 del Código de Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual los derechos laborales prescriben en un término de tres (3) años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible y el simple reclamo escrito, por una prestación debidamente determinada, interrumpe la prescripción, pero solo una vez por un lapso igual.

Por su parte el artículo 94 del Código General del Proceso², aplicable en materia laboral por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal Laboral y Seguridad Social, preceptúa que la presentación de la demanda interrumpe el término de la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el Auto admisorio se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a su notificación; veamos:

“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. ...”

Sobre la normatividad anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL 5159 del 11 de noviembre de 2020, Radicado 60656, precisó que “...la prescripción de las acciones laborales puede ser interrumpida a través de dos mecanismos diferentes y no excluyentes: la extrajudicial, mediante la presentación al empleador del simple reclamo escrito por el trabajador respecto de un derecho determinado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo; y con la presentación de la demanda, en los términos y condiciones señaladas por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil...”. (Negritas fuera del texto).

² Antes artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Y en Sentencias SL 308 del 27 de enero de 2021, Radicado 81164; SL 749 del 2 de marzo de 2021, Radicado 48491; SL 3904 del 17 de septiembre de 2019, Radicado 73094; SL 1533 del 2 de mayo de 2018, Radicado 60514 y la SL 8716 del 2 de julio de 2014, Radicado 38010, precisó que entre la presentación de una demanda y su notificación, pueden generarse diversas eventualidades, que no son imputables a quien funge como demandante; por lo que se ha admitido excepciones a la regla prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil -hoy artículo 94 del Código General del Proceso-, cuando la notificación del Auto admisorio de la demanda no se efectúa oportunamente, por negligencia del juzgado o por actividad elusiva del demandado. En la primera de las providencias citadas, la Alta Corporación, reiterando su jurisprudencia, indicó:

“Acorde con tales postulados éticos, recogidos como normas de obligatorio cumplimiento por la legislación positiva, observa esta Sala que la sola presentación de la demanda interrumpe la prescripción cuando la notificación del auto admisorio de la misma no se efectúa oportunamente por negligencia del Juzgado o por actividad elusiva del demandado, ya que repugna al ordenamiento jurídico que el actor que obra con rectitud y satisface las cargas procesales que sobre él pesan tenga, sin embargo, que soportar consecuencias jurídicas desfavorables por conductas reprochables a la incuria de funcionarios judiciales o a maniobras de la parte contraria, que, posteriormente, resultase beneficiada de su propia conducta contraria a derecho.

Precisamente, en este mismo sentido, expresó la Corte, Sala de Casación Civil, que la sola interposición de la demanda no interrumpe la prescripción salvo que el retardo en notificar a éste (el demandado) no se deba a culpa del demandante (...) sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del Juzgado encargo (sic) de hacerla, casos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda”. (Negrillas fuera del texto).

Atendiendo a lo precisado por la jurisprudencia anterior, encuentra esta Sala de Decisión Laboral, que en el asunto debatido existió una actividad elusiva de Coomeva E.P.S. S.A., ya que se constata en las guías de correo³, en las cuales se observa el sello de recibido de esa entidad, que efectivamente recibió el 11 de mayo de 2015 la citación para diligencia de notificación personal⁴ y el 23 de junio del mismo año, la citación por aviso⁵; sin proceder a

³ Folios 61 y 66.

⁴ Folios 61 a 63.

⁵ Folios 65 a 67.

presentarse a notificarse de la demanda o nombrar un apoderado judicial, lo cual sólo hizo cuando fue emplazada y se le nombró un curador ad-litem⁶.

De lo expuesto queda claro, que **la parte demandante fue diligente en tratar de lograr la notificación de la demanda Coomeva E.P.S. S.A. una vez fue admitida la demanda; no obstante dicha entidad pese a haber recibido la citación para notificarse y la notificación por aviso, no compareció, lo cual denota una actitud reprochable que a todas luces evidencia una actividad elusiva en el proceso de notificación del Auto admisorio de la demanda, por lo que, de acuerdo a lo precisado en la jurisprudencia anteriormente citada, se entenderá que la presentación de la demanda interrumpió la prescripción,** frente a la solicitud de reembolso de lo pagado por consultas, medicamentos y procedimientos médicos realizados al señor Alberto Molina Valencia entre los meses de junio y septiembre del año 2012; presentándose demanda el 30 de abril del año 2015⁷ que interrumpió el término prescriptivo trienal.

Es de anotarse que no le asiste razón a la recurrente, cuando aduce que el término de 15 días consagrado en la Resolución 5261 de 1994 es imperativo y por tanto de obligatorio cumplimiento; al respecto, **la H. Corte Constitucional, en la Sentencia T-650 de 2011, reiterando su jurisprudencia, precisó que el plazo establecido en el artículo 14 de la citada Resolución, no puede entenderse de ningún modo como un término prescriptivo de la obligación, sino que corresponde simplemente al término con el que cuentan los afiliados para adelantar el trámite administrativo de su solicitud; veamos:**

“Adicionalmente, la vulneración de los derechos de la accionante se torna más gravosa por cuanto la entidad accionada negó el reconocimiento de dicha prestación con fundamento en el incumplimiento de un requisito meramente formal, como es la extemporaneidad de la reclamación, esto es, vencido el término establecido en el artículo 14 de la resolución 5261 de 1994, según la cual “... la solicitud de reembolso deberá hacerse dentro de los quince (15) días siguientes al alta del paciente...”.

De este modo, se resolverá de acuerdo a lo establecido en la sentencia T-594 de 2007, en donde se manifiesta que el plazo para efectuar la reclamación establecido en la Resolución

⁶ Folios 69 a72.

⁷ Folio 5.

referida, no puede entenderse de ningún modo como un término prescriptivo de la obligación que tiene Coomeva de reconocer a sus usuarios el reembolso de los dineros que le corresponda asumir a la E.P.S. por expresa disposición del régimen de seguridad social en salud. En efecto, el plazo corresponde simplemente al término con el que cuentan los afiliados para adelantar el trámite administrativo de su solicitud ante la entidad, razón por la cual el cumplimiento del mismo, no puede tener como consecuencia la pérdida del derecho del usuario a obtener el reembolso, ni la exoneración de la entidad de cumplir con las obligaciones que le concurren. ...”

Además de lo anterior, recuérdese que tal como se explicó en precedencia, el fenómeno jurídico de la prescripción, en asuntos de la seguridad social, se encuentra regulado en el artículo 151 del Código de Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual los derechos laborales prescriben, en principio⁸, en un término de tres (3) años contados desde que la obligación se haya hecho exigible.

Así las cosas, no están llamadas a prosperar las inconformidades de la apoderada recurrente, procediendo confirmar la decisión de Primera Instancia.

2° Reembolso:

Acepta la apoderada de Coomeva E.P.S. S.A. que al usuario se le ordenó la práctica de la cirugía de manera prioritaria, agrega que ello no se traduce una urgencia y cuando se habla de prioritario, se puede tener un tiempo estimado entre la orden y la materialización del servicio, mientras que lo urgente no da ninguna espera; sin evidenciarse negligencia de su mandante, por cuanto realizó un “ordenamiento” al Instituto Neurológico de Colombia, atendiendo a lo decidido en el fallo de tutela, por lo que no debió de hacer el cobro particular sino refacturar a Coomeva E.P.S., quedando por tanto demostrado que tuvo la intención de cumplir lo ordenado por el médico tratante al usuario fallecido. Frente a lo anterior, encuentra esta Magistratura, no es procedente su inconformidad, toda vez que:

⁸ Término que puede interrumpirse por un lapso igual, por el simple reclamo escrito del afiliado.

En lo relativo al reconocimiento de reembolsos, el artículo 14 de la Resolución 5261 de 1994, establece que las entidades prestadoras de salud deberán reconocer los gastos que haya efectuado el afiliado por su cuenta, por concepto de atención de urgencias, en caso de ser atendido en una I.P.S. que no tenga contrato con la respectiva E.P.S., cuando haya sido autorizado expresamente por la E.P.S. para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios; veamos:

“ARTICULO 14. RECONOCIMIENTO DE REEMBOLSOS. Las Entidades Promotoras de Salud, a las que esté afiliado el usuario. deberán reconocerle los gastos que haya hecho por su cuenta por concepto de: atención de urgencias en caso de ser atendido en una I.P.S. que no tenga contrato con la respectiva E.P.S., cuando haya sido autorizado expresamente por la E.P.S. para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad, negativa injustificada o negligencia demostrada de la Entidad Promotora de Salud para cubrir las obligaciones para con sus usuarios. La solicitud de reembolso deberá hacerse en los quince (15) días siguientes al alta del paciente y será pagada por la Entidad Promotora de Salud en los treinta (30) días siguientes a su presentación, para lo cual el reclamante deberá adjuntar original de las facturas, certificación por un médico de la ocurrencia del hecho y de sus características y copia de la historia clínica del paciente. Los reconocimientos económicos se harán a las tarifas que tenga establecidas el Ministerio de Salud para el sector público. En ningún caso la Entidad Promotora de Salud hará reconocimientos económicos ni asumirá ninguna responsabilidad por atenciones no autorizadas o por profesionales, personal o instituciones no contratadas o adscritas, salvo lo aquí dispuesto”.

Por su parte el artículo 9° ibidem, establece lo que debe entenderse por urgencia, así: “... **la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.**” (Negrillas fuera del texto).

De acuerdo a la normatividad anterior, quien pretende un reembolso como el solicitado en este proceso, debe acreditar que estaba en medio de una urgencia o que mediaba la autorización de la EPS, siendo ésta negligente en la prestación del servicio prestado. Y en el asunto debatido, de acuerdo a lo indicado

en los hechos 3° y 6° de la demanda⁹, la atención que recibió el señor Alberto Molina Valencia, en el Instituto Neurológico de Colombia, fue producto de una urgencia ya que *“como única alternativa para salvar su vida requirió con urgencia la cirugía con Cyberknife, para sí descomprimir los órganos vitales que están comprimidos por la masa tumoral”*.

Analizada la historia clínica del señor Alberto Molina Valencia y los documentos obrantes a folios 155 a 178, se constata que le fue diagnosticado *“Mediastino y paratraqueal -resección fragmentaria: Liposarcoma mixto (adiposo y esclerótico, con áreas moxomatosas”*, con compromiso cardiovascular y en *“Junta Médica con Cirugía de torax con el Dr. Alejandro Gaviria se recomienda por el tipo de histología “sarcoma” la resección máxima con marcación del tejido residual para valorar adyuvancia oncológica POP es la única opción en el paciente con justificación en el buen estado funcional y no tener metástasis. **Es de carácter prioritario ya que la progresión de la enfermedad por la localización mediastinal podría ser fatal**”*; se le ordenó cirugía robótica con Ciberknife, tratamiento de cuatro a cinco fracciones y que por tratarse de reirradiación hay unos efectos de mayor riesgo a nivel esófago con estenosis y en la médula espinal con mielitis actínica y que por localización de la lesión se compromete la estructura anatómica cardiovascular. Se realiza la primera cirugía el 19 de septiembre de 2012 y ante la agresividad de la enfermedad el señor Alberto Molina Valencia fallece el 21 del mismo mes y año.

De lo expuesto, se concluye sin lugar a dudas que contrario a lo aducido por la recurrente, la cirugía robótica con Ciberknife, sí constituía una urgencia que merecía atención inmediata, ya que *“la progresión de la enfermedad ...podría ser fatal”*; como en efecto ocurrió dos días después del procedimiento. Recuérdese además que una urgencia no es únicamente aquella en la cual la persona está al borde de la muerte, sino en términos del artículo 9° de la Resolución 5261 de 1994, es la alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica, que comprometen la vida o funcionalidad de la persona y que requiere de la protección inmediata de

⁹ Folio 1.

servicios de salud, a fin de conservar la vida y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.

Además de lo anterior, también se vislumbra una **clara negligencia de Coomeva E.P.S. S.A.**, pues al señor Alberto Molina Valencia se le prescribió la cirugía robótica con Ciberknife desde el 15 de junio de 2012, como se constata en la historia clínica -ver folio 169-, se viéndose obligado a presentar Acción de Tutela¹⁰ que fue conocida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de garantía de Medellín, quien notificó su admisión a la entidad aquí demandada el 5 de septiembre de 2012, sin obtener respuesta alguna y pese a que mediante Fallo del 19 de mismo mes y año, se tutelaron los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida en condiciones dignas del tutelante, ordenando el referido procedimiento y el tratamiento integral, por lo cual tuvo que asumir el pago en forma particular.

De acuerdo a lo expuesto, se configuraron los presupuestos consagrados en los artículos 9° y 14° de la Resolución 5261 de 1994, para que Coomeva E.P.S. S.A. proceda al reembolso de los valores pagados por concepto de los procedimientos médicos realizados al señor Alberto Molina Valencia, al requerirse los mismos, procediendo por tanto la confirmación de la decisión de Primera Instancia.

Corolario de lo expuesto, esta Sala de Decisión Laboral confirmará en todas sus partes la Sentencia de la fecha y procedencia conocidas, que en Apelación se revisa, incluida la condena en costas.

¹⁰ Folios 26 a 33.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia, a cargo de la demandada Coomeva E.P.S. S.A. al no haber prosperado el recurso de Apelación, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$908.526,00, en favor de la parte demandante; lo anterior conforme a lo establecido en el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura y el artículo 365 del Código General del Proceso.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** en todas sus partes la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta Sentencia.

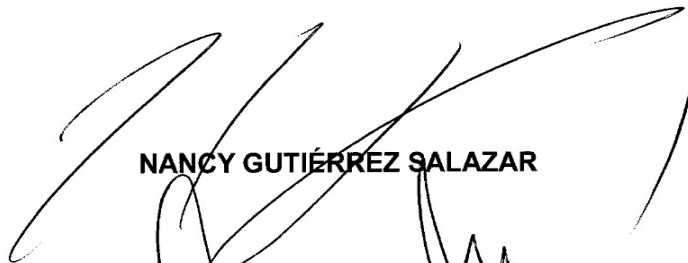
SEGUNDO: Se **CONDENA** en costas en Segunda Instancia a cargo de la demandada Coomeva E.P.S. S.A.; fijándose como agencias en derecho la suma de **NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/L (\$908.526,00)** a favor de la parte demandante; según lo explicado en la parte motiva de esta Providencia.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** (electrónicos de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020) y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen. En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

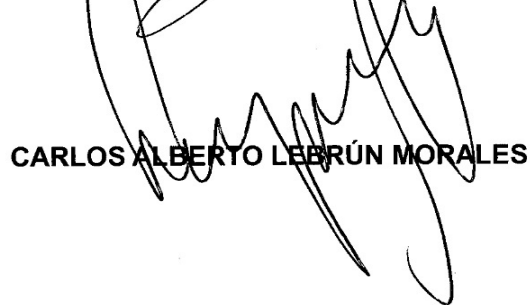
Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**
Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 058 del 9 de abril de 2021
consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>